



## Informe de política de la ONU / DAES # 75: COVID-19: Reafirmación de las relaciones de gobernanza entre el Estado y el pueblo

Documento traducido de la página de las Naciones Unidas. Para consultar publicación original dar click [aquí](#)

Este informe de política analiza el papel de la gobernanza eficaz, y en particular el papel de la relación entre el estado y los ciudadanos en la construcción de la resiliencia de los países y en la respuesta y la gestión de crisis a nivel nacional que presenta la pandemia del COVID-19. Después de esbozar los elementos clave de las relaciones de gobernanza entre el Estado y el pueblo, el informe presenta cinco mensajes clave de política que enfatizan que (i): la pandemia y la crisis de COVID-19, aunque es un desafío, también presenta una oportunidad para diseñar y operar una infraestructura de salud pública resiliente e instituciones efectivas para manejar crisis; (ii) la provisión de servicios esenciales para todos debe ser el núcleo de la relación de gobernanza Estado-pueblo; (iii) la protección social para todos, especialmente los pobres y vulnerables, es un requisito previo para fomentar una sociedad resiliente (iv) el liderazgo estatal legítimo y confiable es fundamental todo el tiempo, pero aún más durante una crisis nacional como la pandemia de COVID-19; y (v) el gobierno en tiempos de crisis debe esforzarse por mantener la unidad del país, fomentar la solidaridad y evitar la desintegración social. La aparición y propagación del coronavirus a fines de 2019 y el impacto de su enfermedad, COVID-19, que ha sido categorizada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global, está, en el momento de escribir este artículo, en curso.

que enfatizan que (i): la pandemia y la crisis de COVID-19, aunque es un desafío, también presenta una oportunidad para diseñar y operar una infraestructura de salud pública resiliente e instituciones efectivas para manejar crisis; (ii) la provisión de servicios esenciales para todos debe ser el núcleo de la relación de gobernanza Estado-pueblo; (iii) la protección social para todos, especialmente los pobres y vulnerables, es un requisito previo para fomentar una sociedad resiliente (iv) el liderazgo estatal legítimo y confiable es fundamental todo el tiempo, pero aún más durante una crisis nacional como la pandemia de COVID-19; y (v) el gobierno en tiempos de crisis debe esforzarse por mantener la unidad del país, fomentar la solidaridad y evitar la desintegración social. La aparición y propagación del coronavirus a fines de 2019 y el impacto de su enfermedad, COVID-19, que ha sido categorizada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global, está, en el momento de escribir este artículo, en curso.

Los esfuerzos de los gobiernos para tratar de controlar la propagación de la pandemia mientras se gestionan sus impactos de amplio alcance demuestran el papel fundamental de la relación entre el estado y la población en la configuración y determinación de las respuestas, estrategias y enfoques del gobierno para abordar la crisis. Si bien ha habido algunas respuestas rápidas y efectivas por parte de los gobiernos, en muchos aspectos, la pandemia ha puesto de manifiesto algunas de las deficiencias en la capacidad de resistencia de los países a las crisis y, en particular, en la forma en que el estado se relaciona con su gente para hacer realidad los valores y principios de gobernanza eficaz.



La resiliencia y la gobernanza eficaz van de la mano y son elementos clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Junto con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda proporciona una estrategia global de transformación que tiene como objetivo fomentar sociedades resilientes que adopten los valores de equidad, igualdad, inclusión, rendición de cuentas, integración, paz y seguridad, justicia, respeto por la diversidad, colaboración y asociaciones.

Las sociedades resilientes se basan en la gobernanza eficaz y el principio de no dejar a nadie atrás, elementos clave para estar equipados para hacer frente a crisis inesperadas. El Comité de Expertos en Administración Pública (CEPA) de las Naciones Unidas describió 11 principios de gobernanza eficaz, categorizados en tres grupos: el grupo uno se centra en la eficacia (competencia, formulación de políticas sólidas y colaboración), el grupo dos se centra en abordar la responsabilidad (integridad, transparencia y supervisión independiente) y el grupo tres se centra en la inclusión (no dejar a nadie atrás, no discriminación, participación, subsidiariedad y equidad intergeneracional). Todos los principios son necesarios para una gobernanza eficaz y se encuentran en el centro de la relación que debería existir entre el estado y las personas.

### **La pandemia de COVID-19: el papel de la gobernanza eficaz en la gestión de una crisis mundial**

En el espacio de unos pocos meses, la pandemia de COVID-19 se ha vuelto mortal, matando a miles y enfermando a millones al tiempo que ejerce una presión sin precedentes en los sistemas de atención médica y otros servicios públicos en todo el mundo. Los datos disponibles muestran que más de 4 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas con COVID-19 y más de 270,000 personas han muerto a causa de él (hasta el 8 de mayo de 2020, OMS, tablero, Covid.who.int). La pandemia también ha tenido un impacto negativo severo en las economías, las empresas y la interacción social, cuyos efectos, aunque aún no se conocen del todo, se espera que sean profundos y prolongados.

Los esfuerzos de los gobiernos para combatir la propagación del virus han puesto de relieve el papel fundamental de la gobernanza eficaz e inclusiva y, lo que es más importante, la relación entre el estado y las personas. Muchos gobiernos han tomado medidas contundentes, como el bloqueo (unos setenta y tres países han implementado medidas nacionales de bloqueo, mientras que otros aún tienen medidas locales), el distanciamiento social, la localización de contactos, el trabajo desde casa y el cierre de escuelas y no -servicios y negocios esenciales para detener la propagación y devastación del virus. De hecho, las medidas que se están tomando se hacen eco de muchas de las que se tomaron durante los períodos de guerra y la retórica de estar en guerra con el virus es una que invocan muchos líderes, incluidas las Naciones Unidas: "Estamos en guerra con un virus y no lo estamos ganando",

De hecho, en muchos países se han activado los mecanismos de defensa del Estado para ayudar a las personas en la lucha contra el COVID-19. En China, Italia, Estados Unidos y otros países, las fuerzas de seguridad nacional se han movilizado para participar en actividades de defensa de la población contra el COVID-19. En China, el ejército construyó hospitales y desplegó expertos médicos y voluntarios en hospitales y centros de tratamiento para combatir el virus. En los EE. UU., La Marina desplegó barcos hospitales para brindar apoyo médico a los residentes locales en las áreas más afectadas, mientras que los laboratorios militares de su gobierno han estado trabajando para ayudar a desarrollar una vacuna para el virus. En Uganda y la vecina Kenia, el ejército y la policía



están patrullando las calles para garantizar que los toques de queda y los cierres estén en vigor para detener la propagación del virus. Del mismo modo, en Italia,

Sin embargo, la respuesta global no ha sido uniforme. Algunos gobiernos han decidido no tomar medidas como las mencionadas anteriormente, mientras que otros, a saber, aquellos con sistemas de gobierno federal, han visto una respuesta inconexa, con varios estados o regiones promulgando medidas diferentes. Independientemente de la respuesta, en todos los países la relación Estado-pueblo ha estado bajo presión y un mayor escrutinio. Una crisis nacional de esta magnitud obliga inevitablemente a reflexiones y reconsideraciones de los roles, obligaciones, responsabilidades de uno y otro. La forma en que las sociedades gestionan esta relación puede tener un impacto significativo en la eficacia de la contención, las medidas de respuesta y la velocidad de recuperación.

### **Relación de gobernanza entre el estado y el pueblo durante la crisis nacional**

En tiempos de crisis nacional, la gente recurre al estado y sus instituciones en busca de liderazgo y acción unificada. Irónicamente, es también durante una crisis cuando las capacidades del estado y sus instituciones son más desafiadas. Este es el caso durante la pandemia de COVID-19 en curso.

En todo el mundo, el estado brinda, en diversos grados, servicios críticos como salud, educación, infraestructura, información, justicia y otros. Estos servicios se pueden prestar de varias formas (gratis, subvencionados o al costo total para el consumidor). Pero en crisis graves, como la pandemia actual, la relación del proveedor puede extenderse. Desde Ruanda y Uganda, donde los gobiernos están distribuyendo alimentos y otros productos básicos, como jabón, a los pobres y vulnerables, a los EE. UU., donde el gobierno federal ha proporcionado cheques de estímulo COVID-19 a personas y empresas según los niveles de ingresos y el tamaño de la familia. para protegerlos de las dificultades causadas por la pandemia, a Ghana, donde el gobierno ha tomado medidas para garantizar la continuidad del suministro de agua y electricidad durante la pandemia, gobiernos, Independientemente de sus niveles de desarrollo económico, están manifestando su relación de proveedores hacia las personas. La prestación de servicios médicos y de salud, incluidas las pruebas y la hospitalización por COVID-19, también son principalmente proporcionados por el estado. La rápida implementación de las pruebas gratuitas para el COVID-19 en la República de Corea ha sido aclamada como una de las razones por las que el país ha logrado controlar el virus con relativa rapidez. En tiempos de crisis, el viejo grito (en algunos círculos de gobernanza pública) para que el gobierno se salga de la vida de las personas y las empresas se disipa y la demanda de intervención del gobierno como proveedor de servicios básicos y redes de seguridad se hace cargo. Este es el caso de la pandemia de COVID-19. La prestación de servicios médicos y de salud, incluidas las pruebas y la hospitalización por COVID-19, también son principalmente proporcionados por el Estado..

El estado como protector de su gente, especialmente de los pobres y vulnerables, debe demostrar su eficacia durante una crisis nacional. En particular, una crisis como la pandemia COVID-19 puede fácilmente abrir o exacerbar divisiones y desigualdades en la sociedad. Esto puede ser por motivos geográficos, étnicos, raciales, religiosos, económicos, de género o de edad. Durante la crisis de COVID-19, algunas poblaciones golpearon de manera desproporcionada más que otras, en



particular, las personas mayores y aquellas con condiciones de salud existentes que tienen tasas de morbilidad más altas por la enfermedad, aquellas en empleos precarios que han perdido trabajos, contratos, beneficios y derechos; 'trabajadores esenciales', incluidos los profesionales de la salud y los trabajadores de las industrias de aplicación de la ley, transporte, servicios y hotelería, que continúan trabajando en el lugar y están expuestos durante la crisis;

Sin embargo, desde la perspectiva de una sociedad y un estado resiliente, el papel de la protección no solo debe invocarse durante una crisis. La modalidad de protección y seguridad sociales debe establecerse estratégicamente para asegurar la vida de manera predecible a estos sectores vulnerables de la sociedad tanto durante tiempos normales como durante crisis.

### **Abordar la crisis: adoptar un enfoque de sociedad en su conjunto, mejorar la credibilidad y la confianza y combatir la investigación sobre desinformación**

Para abordar la crisis de COVID-19 de manera efectiva, el estado debe ser un colaborador, creando alianzas con la sociedad civil y el sector privado en un enfoque de 'toda la sociedad' para involucrar de manera inclusiva a todas las comunidades y partes interesadas en los esfuerzos para encontrar soluciones a los diversos desafíos que plantea la pandemia. El estado tiene que relacionarse con el pueblo como unificador, no dejando a la población sola para enfrentar los riesgos no abordados de la desintegración social. Es en tales esfuerzos por mantener la unidad del país que un enfoque de toda la sociedad puede ser de gran utilidad.

Bajo un enfoque de sociedad en su conjunto, la relación de gobernanza entre el Estado (siempre que sea democrático y creíble) y el pueblo durante una crisis de esta magnitud debe basarse en escucharse mutuamente. La gente necesita escuchar al estado y ventilar sus demandas a través de los canales designados y el estado necesita escuchar a la gente, porque en la mayoría de los casos la gente comprende los problemas y desafíos de las crisis y, a menudo, tiene soluciones que proponer. Entre las personas que hay expertos que tienen conocimiento sobre la crisis se encuentran: proveedores de atención y trabajadores médicos que entienden claramente cómo manejar los desafíos de salud; investigadores que puedan desplegar su perspicacia investigadora para llegar a una solución; sociólogos que puedan tener pistas sobre cómo la sociedad debe afrontar los desafíos provocados por la crisis; y así.

Como ha demostrado la pandemia de COVID-19, los esfuerzos de aplicación de la ley también dependerán de la confianza y la colaboración de la gente, ya que algunas personas pueden objetar y no seguir las pautas dadas por las autoridades nacionales o locales y, como consecuencia, representar un peligro para el resto de la población. Desde Wuhan en China, donde decenas de millones de personas fueron las primeras en experimentar el bloqueo a principios de 2020 hasta los setenta y tres países que siguieron su ejemplo y cuando la pandemia llegó a sus costas, incluidos Italia, Irlanda, Grecia, España, Desde Nueva Zelanda, Colombia, Perú, Ruanda y muchos otros países, hasta la República de Corea, donde se hizo cumplir el rastreo de contactos, los esfuerzos para hacer cumplir las medidas ejecutivas para contener la pandemia están demostrando la importancia de la confianza mutua entre el estado como ejecutor de órdenes para proteger a las personas. .

Más allá del nivel nacional, se deben establecer colaboraciones y asociaciones con actores globales en un enfoque de 'todo el mundo', por ejemplo, los investigadores médicos gubernamentales están



trabajando con sus contrapartes en el sector privado y la sociedad civil para desarrollar una vacuna contra el virus. Los gobiernos están colaborando con la OMS y otras organizaciones internacionales en los esfuerzos por contener la propagación del virus. En un mundo interconectado, esta pandemia no puede ser resuelta por un solo país por sí solo.

En su mensaje de video sobre COVID-19 y desinformación del 14 de abril, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, llamó la atención sobre otra epidemia, la de desinformación peligrosa. A medida que aumenta el conocimiento sobre el COVID-19, también lo hacen los numerosos rumores que rodean al virus, lo que genera temor y pone en peligro los esfuerzos para combatir y contener la pandemia. En tiempos de crisis, la gente busca que el gobierno proporcione información creíble basada en hechos. Esta credibilidad no solo depende en gran medida de la confianza que la gente tiene en el gobierno, sino que también depende de la forma y a través de quién el gobierno proporciona información constante y confiable a la gente. El estado debe implementar tecnologías modernas y estructurar sus operaciones de tal manera que contrarresten constantemente la información falsa y los datos manipulados con hechos y fuentes de datos confiables.

En tiempos de crisis, más que nunca, la legitimidad, la credibilidad y la confianza sirven como base para las relaciones positivas entre el Estado y el pueblo. Esto depende en gran medida de si la gente percibe a las instituciones estatales y el liderazgo como legítimos y si existe un alto nivel de confianza entre la gente y el liderazgo del gobierno y el servicio público. La forma en que se maneja la crisis puede mejorar o disminuir la confianza que la gente tiene en las instituciones gubernamentales y el liderazgo. En otras palabras, una crisis, incluso una tan grave como la pandemia actual, puede brindar una oportunidad para aumentar la confianza de las personas en el gobierno. Finalmente, la legitimidad, la credibilidad y la confianza son necesarias para que la gente responda a través del compromiso colaborativo con las autoridades públicas en estrategias de toda la sociedad para combatir crisis nacionales y globales como la pandemia de COVID-19.

### **Mensajes clave**

1. La pandemia y la crisis del COVID-19 presenta un desafío, pero también una oportunidad para diseñar y operar una infraestructura de salud pública inclusiva y resistente e instituciones efectivas para manejar la crisis: La pandemia de COVID-19, si bien es principalmente una crisis médica y de salud, se está convirtiendo en una crisis económica y humanitaria. Su gestión tiene implicaciones de gran alcance para la relación entre el Estado y el pueblo. Como tal, brinda una oportunidad para que el estado y las personas reflexionen sobre el tipo de relaciones de gobernanza que deben establecerse para garantizar la resiliencia, la sostenibilidad y el bienestar de todos en la sociedad. La pandemia de COVID-19, por devastadora que sea, ha proporcionado un momento para que cada gobierno, y de hecho el mundo entero, establezca una infraestructura de gobernanza y salud pública que pueda prever, identificar y responder a las pandemias rápidamente a fin de minimizar el sufrimiento. pueden traer a la gente.

2. La prestación de servicios esenciales para todos debe ser el núcleo de la relación de gobernanza entre el estado y el pueblo: no debería ser necesaria una pandemia o una crisis para que el estado averigüe cómo proporcionar servicios críticos a sus ciudadanos. En 2015, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron que los gobiernos deben defender el logro de los ODS y no dejar



a nadie atrás. Esto se traduce en asegurar que las personas tengan acceso a servicios inclusivos y asequibles que contribuyan al desarrollo sostenible e inclusivo. Es necesario diseñar, acordar e implementar políticas y estrategias a largo plazo para proporcionar servicios públicos que tengan en cuenta las necesidades de todos, especialmente los pobres y vulnerables.

3. La protección social para todos los ciudadanos, especialmente los más pobres y vulnerables, es fundamental para tener una sociedad resiliente: La pandemia de COVID-19 ha subrayado la necesidad de que el estado implemente políticas, estrategias y medios institucionalizados para garantizar la protección social para todos, especialmente para los más pobres y vulnerables. La protección social debe diseñarse para cubrir a todas las personas, reducir la pobreza y la desigualdad, promover el desarrollo y el crecimiento sostenibles y apoyar la inclusión social, la cohesión social, la democracia y sociedades justas y pacíficas. La mayor lección aprendida aquí es que el Estado no debe esperar a que se produzca una crisis para poner en marcha mecanismos de protección social. Más bien, los mecanismos de protección social deben diseñarse con respuestas a posibles crisis como la pandemia COVID-19 incorporadas para evitar una búsqueda aterradora de soluciones en medio de una crisis.

4. Un liderazgo estatal creíble, legítimo y confiable es fundamental todo el tiempo, pero más aún durante una crisis nacional como la pandemia COVID-19: las relaciones sólidas entre el estado y el pueblo dependen en gran medida de altos niveles de confianza en el gobierno y su liderazgo. Los líderes gubernamentales deben crear condiciones que cultiven la confianza de la gente, entre otras cosas, asegurando la difusión de información y comunicación basada en hechos, actuando con transparencia e integridad, sirviendo al público de manera equitativa con responsabilidad y humanidad, y trabajando en asociación y colaboración con partes interesadas, incluido el sector privado y la sociedad civil.

5. El gobierno en tiempos de crisis debe esforzarse por mantener el país unificado para evitar la desintegración social: Un pueblo unido tiene mayores posibilidades de superar cualquier crisis. Las políticas que hace el gobierno, las estrategias que elabora, los servicios de emergencia que brinda y las directivas y lineamientos que presenta deben verse como beneficiando a todos en el país por igual para fomentar la equidad y la solidaridad. Esto es tan cierto a nivel nacional para la unidad nacional como a nivel internacional para mantener al mundo unido frente a crisis globales como la pandemia de COVID-19. El brote y la rápida propagación del virus ha demostrado claramente que un brote en un país es una amenaza para todos los países; algo que exige firmemente la solidaridad internacional para combatirlo y prevenir este tipo de pandemias en el futuro.